



República de Colombia



Sala Quinta de Decisión Laboral

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada Ponente

REFERENCIA: PROCESO ORDINARIO LABORAL – **SENTENCIA**
RADICACIÓN: 05 001 31 05 **010 2018 00340 01**
DEMANDANTE: LUIS EDUARDO OSPINA ARREDONDO
DEMANDADO: NELSON DE JESÚS VALENCIA ALZATE

Medellín, primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

En la fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, se reunió la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los Magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE, quien actúa como ponente, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022, por el Juzgado 10° Laboral del Circuito de Medellín.

I. ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se condene al demandado a reconocer y pagar la *«pensión de invalidez o la indemnización sustitutiva a la que tiene derecho por ser persona en situación de discapacidad física parcial»*, junto con los intereses moratorios (págs. 5, 60 arch. 1 C01).

Como fundamentos fácticos relevantes, expuso que el 21 de enero de 2017 celebró en forma verbal con el demandado un contrato de obra o labor, con el fin de realizar el mantenimiento y reparación de un extractor de aire en el Restaurante Bolívar, sin embargo, el demandado no lo afilió al sistema de seguridad social y por ende, le permitió desempeñar su actividad laboral sin

protegerlo de los riesgos de IVM; ese día a las 11:30 a. m. mientras estaba trabajando, sufrió un accidente que le ocasionó la amputación completa de la falange distal del dedo índice derecho por arrancamiento con polea engrasada sin posibilidad de reimplante por condiciones de segmentos, con compromiso en los demás dedos de la mano derecha que le impide empuñar la mano, con secuelas severas y pérdida de la capacidad laboral.

El mencionado día recibió atención médica por urgencias en el Hospital General de Medellín, lo que *«reportó como enfermedad general para no comprometer a su empleador, porque sabía que no lo tenía afiliado al sistema de seguridad social»*; le ha solicitado al demandado ayuda económica para la atención médica, período de incapacidad y rehabilitación, pero se ha mostrado renuente; de igual forma le pidió que realizara la calificación de la PCL para conocer el porcentaje, fecha de estructuración y origen de la misma ante la JRCI de Antioquia o ante el Laboratorio de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, pero ha hecho caso omiso a la petición (págs. 3-5, 57-59 arch. 1 C01).

II. TRÁMITE PROCESAL

Prevía subsanación, la demanda fue admitida mediante auto del 19 de junio de 2018 ordenándose la notificación y traslado al demandado (pág. 64 arch. 1 C01) quien contestó con oposición bajo el argumento de que entre las partes no existió una relación laboral; el accidente se ocasionó por culpa y descuido del mismo demandante por haber accionado el motor y sin necesidad de hacerlo introdujo el dedo donde estaba la polea; no tuvo conocimiento de las consecuencias y heridas sino hasta cuando se presentó la demanda. Propuso como excepciones las denominadas falta de causa legítima para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe del demandado, temeridad y mala fe del demandante, y abuso del derecho (págs. 72-83, 89 arch. 1 C01).

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 10º Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia proferida el 12 de octubre de 2022, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación, y en consecuencia, absolvió al demandado de las pretensiones incoadas en su contra e impuso costas al demandante, tras considerar que a pesar de que se demostró la prestación de los servicios del demandante el 21 de

enero de 2017, estos se ejecutaron en forma independiente en calidad de contratista, de ahí que no pueda acceder a la pensión de invalidez o a la indemnización sustitutiva de esta prestación, máxime cuando en el dictamen practicado en juicio por la JRCI de Antioquia, se estableció que tiene una PCL inferior al 50% (archs. 15, 18 C01).

IV. RECURSO DE APELACIÓN

El demandante argumentó que fue contratado personalmente por el demandado para prestar servicios en las instalaciones del restaurante del cual es propietario, aunado a que fue subordinado porque tuvo que cumplir órdenes a cambio de un pago, lo que incluso el mismo demandado admitió, por lo que sí se dieron los elementos constitutivos de la existencia de un contrato de obra o labor realizada, sin que lo desnaturalice el hecho de que haya durado 10, 15 o 20 minutos; y, es viable la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez por el accidente ocurrido el 21 de enero de 2017.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Recibidas las diligencias en esta Corporación, mediante providencia del 5 de diciembre de 2022 se admitió el recurso de apelación y conforme a lo normado en el art. 13 de la Ley 2213 de 2022, mediante auto del 2 de junio de 2023 se dispuso correr el respectivo traslado a las partes para alegar, pero solo presentó alegaciones el demandado, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (archs. 2-4 C02).

VI. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites de segunda instancia, sin causal de nulidad que invalide lo actuado, esta Colegiatura procede a resolver el recurso de apelación del demandante, y de conformidad con lo previsto en el art. 66A del CPTSS, el problema jurídico a resolver consiste en determinar cuál fue la relación jurídica que se suscitó entre las partes, si se dieron los elementos constitutivos de un contrato de trabajo bajo la primacía de la realidad sobre las formalidades, para posteriormente establecer la viabilidad de la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez solicitada.

Para determinar la naturaleza jurídica del vínculo, es necesario verificar si concurren los elementos esenciales del contrato de trabajo, previstos en el art. 23 del CST, modificado por el art. 1º de la Ley 50 de 1990, que son la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia respecto del empleador y el salario como retribución del servicio, teniendo en cuenta la presunción legal prevista en el art. 24 *ibídem*, modificado por el art. 2º de la Ley 50 de 1990, respecto a que toda relación de trabajo personal se encuentra regida por un contrato de trabajo, correspondiéndole simplemente a quien alega su existencia, acreditar la prestación del servicio personal y, quien resiste la pretensión, debe derruir la presunción, desvirtuando la existencia de los demás elementos esenciales del contrato de trabajo, y acreditando los elementos de una relación de naturaleza jurídica distinta (CSJ SL10546-2014, CSJ SL10118-2015, y CSJ SL1420-2018).

Y demostrada la prestación personal del servicio, corresponde al funcionario judicial, con los medios probatorios aportados al proceso, establecer los extremos temporales en un determinado periodo, y con ello poder calcular los derechos laborales o sociales que le corresponderían al trabajador demandante (CSJ SL111-2018).

En el caso bajo estudio no se controvierte la prestación personal del servicio por parte de Luis Eduardo Ospina Arredondo en favor del demandado en las instalaciones del establecimiento de comercio de su propiedad denominado Restaurante Bolívar, conforme se establece en el certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (págs. 50-52 arch. 1 C01), pues Nelson de Jesús Valencia Alzate admitió tanto en la contestación demanda como en el interrogatorio de parte, que teniendo en cuenta que el demandante es reconocido por todos los negociantes del sector en donde se encuentra ubicado el restaurante, el 21 de enero de 2017 cuando iba pasando por el frente del local, le pidió ajustar el soporte del motor del extractor de aire que se encontraba flojo en el establecimiento de comercio de su propiedad, porque siempre se dedica a hacer ese tipo de arreglos menores en diferentes establecimientos; de manera que para ello utilizó sus propias herramientas por su cuenta y riesgo; que esas reparaciones las hacía en el momento en el que estuviera desocupado, porque no le demandaba más de una o dos horas, y él le pagaba conforme el precio que le indicaba el demandante.

Así las cosas, se tiene que la prestación de los servicios se encuentra plenamente acreditada; empero, aun cuando la parte demandante, pretende que se dé aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, de la totalidad del material probatorio recaudado no es posible concluir que la prestación de estos servicios hubiera sido subordinada porque la testigo **Luz Mery Jaramillo Hernández**, Ingeniera Industrial que presta servicios en varias ocasiones al restaurante de propiedad del demandado, indicó que no hubo ningún contrato de trabajo con el demandante, pues no es un trabajador del restaurante sino que se trata de una persona que en forma independiente realiza arreglos pequeños de diferentes objetos en los distintos almacenes del sector en donde se ubica dicho restaurante y el dueño de éste, cuando tiene reparaciones más grandes, contrata a personas especializadas; dijo que a pesar de que el 21 de enero de 2017 se encontraba en el restaurante, no presenció cuál fue el arreglo verbal que hubo entre las partes, pero si vio cuando el demandante reparó el motor del aparato con sus propias herramientas, que siempre lleva en un maletín consigo, y luego bajó del segundo piso con el dedo lastimado.

La manifestación de esta testigo resulta coherente, afín y confirma todo lo dicho por el demandado en su interrogatorio de parte, además indicó la razón de la ciencia de su dicho al tenor de lo dispuesto en el art. 221 del CGP, con lo que se concluye que la prestación de los servicios del demandante, en verdad fue de manera independiente y sin injerencia alguna por parte de Nelson Valencia para el desarrollo de las labores; además, la independencia se torna aún más notoria si se analiza el dicho de Luis Eduardo Ospina en su interrogatorio, pues confesó que a esa data (12 de octubre de 2022) tenía 64 años de edad y que durante los últimos 10 ó 15 años, su actividad económica principal, sus negocios e ingresos siempre provienen de efectuar ese tipo de arreglos en los distintos establecimientos de propiedad de sus amigos, incluyendo prenderías de compra y ventas de vehículos, restaurantes y almacenes; y que, esas reparaciones las ejecuta a petición de los propietarios de las instalaciones, pues le tienen confianza.

También afirmó que a lo largo de 6 años, le ha efectuado al demandado unos 15 arreglos en sus propiedades, que en el presente caso, lo que sucedió el 21 de enero de 2017 es que estaba sentado en un parqueadero donde le ayuda al dueño a cuadrar las motos y el demandado lo llamó afuera de su negocio y le dijo que tenía un problema con el extractor, al cual él ya le había arreglado

antes una banda, pero ahora era el motor, que la reparación debía hacerse antes de las 12 m. porque luego llegaba el personal a almorzar, y que el accidente ocurrió mientras él (el demandante) desde el segundo piso le dio la orden a los trabajadores que estaban en el primer piso que prendieran o apagaran el extractor; de manera que de esta situación no se puede desprender que, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, el servicio prestado por el demandante el 21 de enero de 2017 se hizo en forma subordinada, pues el demandado nunca tuvo injerencia en su ejecución, ni se obtuvo por la parte actora una confesión en tal sentido.

Así las cosas, teniendo en cuenta que se acreditó la autonomía e independencia que tuvo Luis Eduardo Ospina Arredondo, quedó desvirtuada la presunción de subordinación del art. 24 del CST, que se activó al acreditar la prestación del servicio, y en consecuencia, se colige que no fue una relación de carácter dependiente la que lo ató a Nelson de Jesús Valencia Alzate, sino la existencia de una coordinación de actividades entre las partes para ejecutar el arreglo de un extractor, que de ninguna manera genera el pago de prestaciones sociales y mucho menos la afiliación en el sistema de seguridad social, que es de la que pretende desprender el demandante su pedimento relacionado con la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez por haber existido en su sentir, una omisión en la afiliación por parte del demandado, que como aquí se vio, no era su obligación en la medida en que no fungió como un verdadero empleador, a más de no corresponder a la prestación a la que habría lugar en caso de haberse demostrado ese supuesto; en consecuencia, se **confirmará** la decisión apelada.

En ese sentido, al tenor de lo dispuesto en el art. 365 del CGP se impondrán costas en la alzada a cargo del demandante comoquiera que le fue resuelto desfavorablemente el recurso de apelación; para tal efecto se deberán incluir como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente para esta anualidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 12 de octubre de 2022 por el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Medellín, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Costas en la alzada a cargo del demandante, como se indicó en las consideraciones anteriores.

TERCERO: Esta sentencia se notificará a través de **EDICTO**, atendiéndose los términos previstos en el art. 41 del CPTSS.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
Magistrado

(*) Hipervínculo de consulta de expediente digitalizado:

<https://etbcsj->

[my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eqo7Xw9n_j5HsGsB8iIFHQ8BWqeK_nXlsTJSIAgB3ZI54Q?e=IepO8S](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des17sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Eqo7Xw9n_j5HsGsB8iIFHQ8BWqeK_nXlsTJSIAgB3ZI54Q?e=IepO8S)

Firmado Por:
Luz Patricia Quintero Calle
Magistrada
Sala 017 Laboral
Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4a488a42d1850bb36a439fe9519af1a4b31630b2fc4c7e6621efdf778a3bf6d1**

Documento generado en 01/04/2024 02:20:02 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>